

EL secreto ha estado bien guardado durante un mes. Al final, sin embargo, estalló la noticia gracias a un periódico «izquierdista» («Lotta continua»). Héla aquí: la sede central de la Policía de Milán fue sometida a registro después de que un magistrado se presentase al jefe de la Policía, Allitto, y exigiese la entrega de una serie de documentos confidenciales. Allitto llamó a la Presidencia del Consejo en Roma: ¿qué debía hacer? Tras tensas explicaciones llegó la respuesta: «Haga lo que se le pide».

Gracias a los documentos confiscados empiezan a saberse muchas cosas: se trata de las instrucciones escritas a raíz de las cuales la Policía de Milán, cubierta por la dirección de la Policía en Roma, por el ministro del Interior y por el jefe del Gobierno, montó una de las más fantásticas maquinaciones policíacas de la historia italiana.

Los hechos se remontan al 12 de diciembre de 1969: aquel día hizo explosión en un Banco de Milán una bomba de espoleta retardada, matando a dieciséis personas e hiriendo a ochenta y ocho. El atentado tuvo lugar en un momento en que una formidable movilización popular amenazaba con barrer al Gobierno. Otros atentados, aunque menos mortíferos, habían sido cometidos desde la primavera de aquel mismo año. La masacre del 12 de diciembre, sin embargo, deja estupefacta a la opinión pública y provoca la anulación por los sindicatos de una gran huelga.

La ofensiva de otoño

La Policía informa inmediatamente que conoce a los culpables: los anarquistas. Un taxista y confidente al mismo tiempo de la Policía, Rolandi, reconoce al presunto autor del atentado: el anarquista Valpreda, al que se detiene el 15 de diciembre. Tres testigos que se encontraban con Valpreda, enfermo, a la misma hora en que se produjo el atentado son acusados de falso testimonio. Rolandi, único testigo de cargo, muere misteriosamente durante la instrucción. Un segundo acusado anarquista, Pinelli, «se arroja» por la ventana del comisariado central de Milán durante su interrogatorio y se mata.

A partir de entonces se acumulan una serie de hechos inquietantes. La autopsia del cuerpo de Pinelli se lleva a cabo en condiciones sospechosas. Entre las pruebas que desaparecen figuran los restos de la bolsa en que estaba metida la bomba, la etiqueta que seguía aún pegada a un trozo de esa bolsa, los restos de tres bolsas idénticas, todas las cuales contenían bombas idénticas, que explotaron en Roma aquel mismo día. El testimonio de una comerciante de Padua, que declaró haber vendido cuatro bolsas parecidas a las que contenían las bombas, desaparece del «dossier» de instrucción.

Transcurre más de un año. El 3 de marzo de 1971, un juez de Treviso, Stitz, reúne pruebas contundentes contra dos dirigentes fascistas, Freda y Ventura, a quie-



Pietro Valpreda, el anarquista italiano detenido bajo la acusación de haber participado en la masacre de Milán, continúa en la cárcel a pesar de que las pruebas de su inocencia parecen cada día más claras.

LA MAQUINACION POLICIACA QUE DEBIA DESARMAR A LA IZQUIERDA SE VUELVE AHORA CONTRA EL PODER

EL COMLOT DE LOS COMISARIOS

nes acusa de cuatro atentados con bomba cometidos entre abril y agosto de 1969. La Policía había sostenido en todo momento que todos los atentados con bomba de 1969 habían sido obra de los mismos individuos. Los detonadores procedían del mismo lote. Freda compró cincuenta detonadores a un fabricante de Bolonia. Según él, esos detonadores se los había revendido luego a un movimiento palestino. Su afirmación resultó ser falsa.

A medida que se consolida la tesis de la maquinación policíaca y de la «masacre de Estado» («strage di Stato»), surgen divisiones dentro de la magistratura. El comisario Calabresi, que dirigió los interrogatorios de Milán, es asesinado por un «profesional» desconocido. Desde que sus colaboradores comenzaron a contradecirse y a cubrirse de ridículo en el proceso entablado por Calabresi al periódico «Lotta continua» por difamación, este comisario empezó a ser considerado como molesto. Los «dossiers» abiertos por Stitz, en Treviso, contra la red fascista son recogidos por el juez D'Ambrosio en Milán.

Entonces se produce el gran golpe teatral: en septiembre último, D'Ambrosio acusa a tres altos dirigentes de la Policía italiana de encubrimiento y destrucción de pruebas y testimonios. Los tres acusados son: el jefe adjunto de la Policía nacional, Catenacci, encargado de las cuestiones políticas; el jefe de la sección política

de la Policía romana, Provenza, y su homólogo milanés, Alegria. Pero por encima de estos hombres se apunta a dos objetivos más importantes: el siciliano Restivo, que era ministro del Interior en la época en que se produjeron los atentados, y Mariano Rumor, que era entonces presidente del Consejo y ocupa actualmente el puesto de ministro del Interior del Gobierno Andreotti. ¿Trataba este último de desembarazarse de su predecesor?

No parece haber ninguna duda al respecto. Lo que habría que averiguar, sin embargo, son las razones que le impulsaban. Todavía a principios de verano seguía aplicando el Gobierno Andreotti una línea dura, de choque frontal. Organizando la caza de militantes, motivando la inculpación de más de quinientos «izquierdistas» en Milán en el espacio de una sola semana; dando rienda suelta a los comandos fascistas, Andreotti esperaba intimidar al movimiento obrero e impedir así su gran ofensiva de otoño. En vano. La ofensiva está a punto de comenzar. Las federaciones sindicales, que intentaban frenarla, se han visto desbordadas por las federaciones industriales: los químicos y metalúrgicos en primer lugar. Los primeros rechazaron el acuerdo propuesto por el sindicato, desencadenando una serie de huelgas masivas, algunas de las cuales (las estalladas en Pirelli) fueron acompañadas de ocupaciones y asambleas permanentes.

Los metalúrgicos, por su parte, están comprometidos en una ofensiva de larga duración. Los consejos de fábrica, elegidos por la totalidad de los obreros, se niegan a convertirse (como deseaban las confederaciones) en correas de transmisión sindicales. La plataforma reivindicativa de los metalúrgicos exige: un aumento de dieciocho mil liras mensuales para todos, reducción de las horas de trabajo a cuarenta semanales, treinta y ocho en la siderúrgica (reducción aplicada, incluso antes de ser concedida, mediante el rechazo, por parte de los obreros, de las horas excedentes); una escala de salarios uniforme con cinco categorías únicamente, desde el peón hasta el cuadro; reconocimiento automático de la cualificación del productor después de dos años de trabajo como máximo; cincuenta horas de formación pagadas, que el obrero podrá utilizar como mejor desee.

Un mal cálculo

Al desbordar el simple marco de las fábricas, atacando una serie de problemas generales como son los transportes (cuya gratuidad exigen), la vivienda y el alza de los precios; al constituirse en comités de barrio y de zona, el movimiento de los metalúrgicos está tomando unos visos altamente polémicos. A finales de octubre llegaron de toda Italia a Reggio Calabria, localidad situada en el extremo Sur del país, cincuenta mil delegados, algunos de los cuales habían hecho hasta cincuenta horas de viaje en tren, para desfilar durante cuatro horas, disputando así el terreno a los fascistas.

En las líneas utilizadas por los trenes especiales fletados por los metalúrgicos, los fascistas colocaron ocho bombas de espoleta retardada que podían haber causado centenares de víctimas. Dos de los trenes descarrilaron.

La reacción fue inmediata: las confederaciones sindicales convocaron a sus afiliados a una hora de huelga de protesta; sin embargo, la mayor parte de las grandes fábricas pararon cuatro horas, y cientos de miles de obreros (cientos cincuenta mil en Milán) desfilaron por el centro de las ciudades. Pero ahí no acaba todo: para noviembre, los metalúrgicos han programado cuatro horas de huelga general y dieciocho horas de huelga «a la carta». La ventaja de estas últimas es que permite a la totalidad de los obreros participar en la lucha, sobre todo en aquellas fábricas en que se trabaja en cinco equipos.

En resumen, la utilización policíaca y gubernamental del terror fascista ha resultado ser un arma de doble filo: en lugar de intimidar al movimiento obrero lo moviliza y radicaliza, reproduciendo, por vez primera desde 1970, la unidad obreros-estudiantes. Así se explica el cambio de actitud del Gobierno Andreotti. Mientras tanto, sin embargo, Valpreda sigue en la cárcel. ■ MICHEL BOSQUET.